



*Poder Judicial de la Nación*  
*Tribunal Federal de Juicio de Bahía Blanca*

FBB 5961/2024/TO1

//hía Blanca, 2 de marzo de 2026.-

**AUTOS Y VISTOS:**

Para resolver en la presente causa **FBB 5961/2024/TO01** caratulada: ***“Ceballos, Claudio Martín y Otro s/ evasión tributaria simple”***, del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal;

**CONSIDERANDO:**

**1ro.)** La defensa técnica de los imputados Claudio Martín Ceballos y María Soledad Amigo (Dres. José Ignacio Fuch y Juan Francisco Carnero, respecto de la imputada Amigo; y Dr. José Ignacio Fuch, respecto del coimputado Ceballos), solicitó el dictado de sobreseimiento en favor de sus asistidos por extinción de la acción penal, sosteniendo que al hecho atribuido le resulta aplicable la Ley 27.799 (B.O. 02/01/2026) en carácter de ley penal más benigna. Ello, conforme surge de las presentaciones obrantes a fs. 173/175.

**2do.)** Conferida la vista correspondiente al Ministerio Público Fiscal, dicha representación se expidió en sentido coincidente, entendiendo que corresponde dictar el sobreseimiento solicitado en virtud de que los hechos imputados actualmente no encuentran adecuación típica (fs. 179/201).

**3ro.)** En primer lugar, cabe reseñar que los imputados de autos, Claudio Martín Ceballos y María Soledad Amigo, fueron requeridos a juicio -en lo que aquí interesa- a título de coautores, por el delito de evasión tributaria simple, relativos al Impuesto a las Ganancias correspondientes al periodo fiscal 2021 por la suma de pesos seis millones trescientos setenta y seis mil setecientos nueve pesos con setenta y cuatro centavos (\$6.376.709,74), en los términos del art. 1 de la Ley 27.430, que habría sido perpetrado a través de la sociedad de



responsabilidad limitada “Acopio y Servicios Agrosol Pigüé SRL”, de la cual -al momento de los hechos investigados- tanto Ceballos como Amigo resultaban ser socios (conf. requerimiento de elevación a juicio del Fiscal Federal obrante a fs. 114/116 -del 18/08/2025- y auto de elevación de fs. 133/143 -del 29/08/2025-).

**4to.)** Ahora bien, la Ley N° 27.799, sancionada el 26 de diciembre de 2025 y promulgada el 2 de enero de 2026, conocida como "Ley de Inocencia Fiscal", introdujo modificaciones sustanciales al Régimen Penal Tributario establecido en el Título IX de la Ley 27.430.

En efecto, conforme la modificación normativa introducida, corresponde precisar los nuevos umbrales económicos previstos para la configuración de los delitos de evasión tributaria. En tal sentido, la figura de evasión simple contemplada en el art. 1 se configura únicamente cuando el monto evadido supera la suma de \$100.000.000 (cien millones de pesos).

En consecuencia, la normativa vigente ha incrementado de manera significativa los montos mínimos requeridos para la configuración de las figuras de evasión —tanto en su modalidad simple como en las agravadas—, circunstancia que debe ser ponderada al momento de analizar la adecuación típica de los hechos traídos a esta instancia.

**5to.)** El análisis sobre la eventual aplicación de la ley penal más benigna debe llevarse a cabo a la luz del marco constitucional, convencional y legal.

En efecto, en lo atinente al marco normativo aplicable, corresponde reseñar que el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley prevé la imposición de una pena más leve, el imputado debe beneficiarse de dicha modificación.





*Poder Judicial de la Nación*  
*Tribunal Federal de Juicio de Bahía Blanca*

FBB 5961/2024/TO1

En igual sentido, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra una regla análoga. Ambas disposiciones gozan de jerarquía constitucional desde la reforma de 1994, en virtud de lo establecido por el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.

Por su parte, el artículo 2 del Código Penal dispone que, si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito difiere de la que rige al momento de dictarse sentencia —o de la que hubiere regido en el lapso intermedio—, debe aplicarse siempre la ley penal más benigna. A su vez, el artículo 4 del mismo cuerpo normativo establece que, salvo disposición específica en contrario, las reglas generales del Código Penal resultan aplicables a los delitos previstos en leyes especiales, como acontece en materia penal tributaria.

Asimismo, el artículo 361 del Código Procesal Penal de la Nación prevé la posibilidad de que, aun en la etapa de juicio, se dicte el sobreseimiento antes de la apertura del debate cuando el imputado resulte exento de pena en virtud de la aplicación de una ley penal más benigna.

Por otro lado, también corresponde reseñar que la doctrina mayoritaria coincide en que la determinación de la ley más favorable debe efectuarse mediante una comparación integral entre los regímenes normativos en juego. En tal sentido, se ha sostenido que —con la única excepción relativa a la prisión preventiva, contemplada expresamente en el art. 3 del Código Penal— no resulta admisible seleccionar de la ley derogada únicamente las disposiciones más favorables y descartar las desfavorables, ni combinar éstas con las de la ley vigente; por el contrario, la confrontación debe realizarse de manera global y sistemática (conf. Baigún y Zaffaroni, *Código Penal*, t. I, Hammurabi, 1997, p. 63). Debe entenderse que una ley penal es más benigna, entre otros motivos,



cuando se verifica que es inadmisibles imponer o mantener una sanción cuando el hecho ya no se considera delito.

**6to.)** Que, asimismo, en el ámbito jurisprudencial y en circunstancias sustancialmente análogas a las que este Tribunal se encuentra actualmente llamado a resolver, la cuestión fue dirimida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Vidal” (Fallos: 344:3156, sentencia del 28 de octubre de 2021). En dicho pronunciamiento, el Máximo Tribunal señaló, en primer término, que se trataba de una materia respecto de la cual ya existía una doctrina clara y consolidada emanada de sus propios precedentes, de la cual los tribunales inferiores no debieron apartarse. En ese marco, recordó que las sucesivas leyes que elevaron los montos mínimos previstos para la configuración de los delitos tributarios —ya sea mediante la modificación de normas anteriores o su sustitución— resultan aplicables retroactivamente en tanto configuran ley penal más benigna. Tal criterio ha sido sostenido en reiterados pronunciamientos y, en el caso citado, la Corte incluso exhortó a que dicha doctrina fuera observada por los tribunales inferiores en asuntos que debían reputarse actuales. A su vez, enfatizó la obligación de las instancias inferiores de respetar y acatar la doctrina constitucional fijada en sus decisiones, destacando que en el caso se había desconocido lo resuelto en los precedentes “Palero” (Fallos: 330:4544, del 23 de octubre de 2007) y “Cristalux” (Fallos: 329:1053, del 11 de abril de 2006).

En consecuencia, el Máximo Tribunal reafirmó el carácter vinculante de su jurisprudencia en la materia y zanjó la controversia interpretativa existente, fijando un criterio uniforme que debe ser observado al momento de resolver situaciones sustancialmente análogas.

**7mo.)** Ahora bien, en esa dirección, la Ley N° 27.799, al elevar sustancialmente los umbrales de punibilidad, se erige más benigna que su





*Poder Judicial de la Nación*  
*Tribunal Federal de Juicio de Bahía Blanca*

FBB 5961/2024/TO1

antecesora que regía la materia penal tributaria al momento en que los acusados supuestamente ejecutaron los sucesos que motivaron su persecución en sede represiva, repercutiendo favorablemente en los intereses de los acusados.

En efecto, de la compulsa de las actuaciones se advierte que los montos presuntamente detraídos al Fisco Nacional —detallados ut supra— resultan inferiores a la suma de cien millones de pesos (\$ 100.000.000), umbral mínimo previsto como condición objetiva de punibilidad para la configuración del delito de evasión tributaria simple. En tales condiciones, la conducta por la cual los imputados fueron requeridos a juicio, en la actualidad, no encuentra adecuación típica.

Así las cosas, en conclusión, en función del principio de retroactividad de la ley penal más benigna, teniendo en consideración lo dispuesto por la ley 27.799 (B.O. 2/01/2026), la normativa reseñada, la doctrina jurisprudencial emergente del precedente “Vidal” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y los dictámenes coincidentes de ambas partes acusadoras, corresponde concluir que los hechos ventilados en el marco de la presente ya no configuran el delito en cuestión, y por tanto corresponde disponer el sobreseimiento de los acusados de la presente causa (artículos 1 y 2 del Régimen Penal Tributario -ley 27.430-, según reforma de la ley 27.799, en función de los artículos 9 CADH, 15.1 PIDCyP, 75 inc. 22 CN, 2 y 4 Código Penal, 336 inc. 3 y 361 CPPN).

**8vo.)** Como consecuencia del sobreseimiento, corresponde expedirse respecto a las medidas cautelares oportunamente ordenadas durante la tramitación de este proceso penal.



En efecto, firme la presente, deberá procederse al levantamiento de las inhibición general de bienes anotada respecto de los coimputados en el Registro de la Propiedad del Inmueble de la Provincia Buenos Aires (anotada el 23/09/2025 bajo el nro. 01 0242566/9).

**9no.)** Por último, firme la presente, deberá librarse oficio al Registro Nacional de Reincidencia de conformidad con lo normado en el art. 2 inc. d) de la Ley 22.117, con copia de lo aquí resuelto.

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo establecido por los artículos 1 y 2 del Régimen Penal Tributario -ley 27.430-, según reforma de la ley 27.799, en función de los artículos 9 CADH, 15.1 PIDCyP, 75 inc. 22 CN, 2 y 4 Código Penal, 336 inc. 3 y 361 del CPPN;

**RESUELVO:**

**1) SOBRESEER a Claudio Martín Ceballos y a María Soledad Amigo**, cuyas demás circunstancias personales obran en autos, en orden al delito por el que fueran requeridos conforme al art. 336 inc. 1 CPPN.

**2) Firme la presente resolución, DISPÓNGASE EL LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES TRABADAS** respecto de los nombrados. A tal fin, líbrense oficios a los registros que correspondan.

**3) Firme la presente resolución, COMUNICAR** la misma al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal mediante oficio electrónico.

Notifíquese a las partes y líbrese DEOX a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero -ARCA-, a los fines que correspondan.

Regístrese, notifíquese, publíquese (Ac. 10/25 CSJN) y firme que sea, archívese.





*Poder Judicial de la Nación*  
*Tribunal Federal de Juicio de Bahía Blanca*

FBB 5961/2024/TO1

SEBASTIÁN FOGLIA

Juez de Cámara

Ante mí:

PAULA POJOMOVSKY

Secretaria de Cámara

SB

---

Fecha de firma: 02/03/2026

Alta en sistema: 03/03/2026

Firmado por: SEBASTIAN LUIS FOGLIA, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CÁMARA



#40433384#491443187#20260302134629663